

Innovaciones en el “problema catalán”

Salvador Aguilar¹

Desde Cataluña, aturde el aluvión de artículos periodísticos y comentarios tertulianos, procedentes del “Estado español”, que afean la conducta política reciente de una mayoría de ciudadanos catalanes. ¿Tan mal se están haciendo las cosas aquí? ¿Cuál es el cambio o innovación que presenta lo que significativa (pero equívocamente) se ha llamado “problema catalán” para producir tal escalada hostil?

Uno de los raros comentarios equilibrados, firmado por el historiador José Álvarez Junco (“Historia de dos ciudades”, en *El País*, 29.9.2013), sugiere que las “élites político-intelectuales” catalanas han “conseguido convencer a una gran parte de su población de que son diferentes a los españoles”. A pesar de los razonables (y razonados) argumentos del tulleano (por Charles Tilly) artículo de Álvarez Junco, hay un punto que, al menos desde la vivencia atenta de un sociólogo residente en Barcelona, parece bien enigmático: ¿cómo han conseguido hacerlo esas élites, y en tan poco tiempo? Incluso suponiéndolo, de lo que nos habrían convencido (y mi pretensión es resumir así el agravio popular medio en Cataluña) no es de que seamos “diferentes a los españoles” sino de que en la situación actual y con el trato que se nos dispensa no nos interesa estar ahí. Esta sería la consecuencia sobre una mayoría de ciudadanos de diversos y conocidos factores: la patética transición “ejemplar”, cómo se manejó a las minorías al hacer la Constitución (en realidad, a toda la población española; de acuerdo, ahí estaban Solé Tura, Roca y Pujol, y la votaron muchos catalanes, pero ¿no se dan cuenta los unionistas de las condiciones en las que se elaboró esa Constitución y de que tres años después de su aprobación hubo un golpe de Estado que restringió los alcances del texto?), el “café para todos” y, para rematar, la comedia estatutaria, donde finalmente asomaron para poner orden (por encima de un texto que acabaron aprobando el Parlamento y la ciudadanía en referéndum), los infumables

¹ Miembro de Comité Científico del Observatori del conflicte social y Profesor de Estructura y cambio social, Universitat de Barcelona.

Alfonso Guerra, Rodríguez-Zapata y tantos otros. (Dice el Diccionario Moliner que “infumable” se “aplica a algo impresentable, muy malo”.) Lo verdaderamente grave no fue tanto la sentencia del TC cuanto que, a las 24 h. (y hasta hoy), no se buscaran formas de acomodar la Constitución al acuerdo político alcanzado, algo que sin duda registró la ciudadanía en Catalunya.

¿Qué ha vuelto a polarizar la opinión? Los árboles no dejan ver el bosque: la dimensión estructural del “problema catalán” sigue siendo la misma de siempre, o algo parecido, y ya son muchos años, décadas e incluso siglos, según algunos, para afirmar que los contornos aproximados de su lógica interna están suficientemente establecidos para quien quiera verlos. Los bosquejaron ya S.M. Lipset y S. Rokkan en su teoría de los *cleavages* en 1967, uno de los estudios fundacionales de la sociología política, donde se mencionan las tensiones entre el centro estatal emergente, “castellano”, y las “periferias” catalana y vasca. Siguiendo esa interpretación, se trata de un caso clásico de opresión cultural y política desde los poderes que dirigen la centralización del Estado, situación que se complejiza aquí porque en esos enclaves periféricos están algunas de las principales fuerzas económicas del Estado español, una situación que no es la habitual en términos comparados. Ello da como resultado la peculiar “esquizofrenia” institucional española: el poder económico y el político están relativamente disociados. Por ello la ciudadanía (catalana en este caso) percibe recurrentemente el inconfundible aroma colonial (la idea se puede ilustrar con prácticamente todas las alusiones a Catalunya de personajes políticos como Aguirre y Aznar, pero también Bono y Guerra, entre otros muchos; y para el ámbito de la ideas, véase el escrito de síntesis del insigne catedrático de historia económica Gabriel Tortella en *El País*, 19.10.2013, con el expresivo título “El tigre que nunca debió salir de su jaula”); pero percibe también (en este caso la ciudadanía española en su conjunto), a la inversa, el discurso del amo explotador (recuérdense, por ejemplo, los exabruptos de Duran Lleida sobre la productividad de los andaluces).

De este embrollo solo podremos salir si algún día las clases dirigentes del Estado, todas (en proporciones lógicamente asimétricas), consiguen “modernizarse”: su arcaica cultura política es a mi entender el principal factor

explicativo del atraso histórico del país y es el que, para lo que nos ocupa aquí, impide que una solución civilizada al “problema catalán”, como por ejemplo la que ha cuajado en Canadá respecto de Quebec, pueda siquiera ensayarse. Su cultura política es “arcaica” porque llegan siempre tarde al tren del avance modernista: adoptan las sendas que retrospectivamente reconocemos como apropiadas en el último momento y por motivos más accidentales que autogenerados. La idea se podría ilustrar emblemáticamente con el trayecto histórico seguido por el capitalismo español (y catalán), o por el de su clase empresarial, pero es autoevidente si reparamos en la derecha española contemporánea: una derecha conservadora con apenas ideas políticas propias, “casposa”, que apenas ha logrado poner en marcha alguna tradición de liberalismo político y anormalmente proclive al radicalismo político y a las soluciones antidemocráticas.

Con la importante excepción de que ahora España es parte de la UE, nada nuevo bajo el sol, pues: estamos ante un nuevo episodio de contienda política que lo único que hace es mostrar que el conflicto no ha entrado en vías de solución. ¿Si no es aquí, dónde está la innovación pues? En dos sitios. Uno, la indignación y contraataque político desde Catalunya, que ha adquirido una dimensión colosal, procede, mucho más que del Govern y los partidos de la sociedad civil y los movimientos populares de base, lo que ha hecho palidecer a las élites políticas españolas porque esto es algo mucho más difícil de atajar que una reivindicación partidaria que admite negociación. Por eso hacen ver que el episodio se limita a una “deriva independentista de Mas”, una de las frases más repetidas por los medios “nacionales”. Y dos, la sociedad civil se ha dotado en pocos años de una miríada de organizaciones fundamentalmente autónomas, algo que se vive en el día a día en Catalunya y que se visualiza con rapidez reparando en las dos probablemente más dotadas, la Asamblea Nacional Catalana y Procés Constituent.

El fenómeno no es inédito en el ámbito europeo bajo la crisis, y ahí está para probarlo el caso de Islandia, pero parece apuntar aquí a direcciones que sí serían inéditas si llegan a cuajar. Primero, porque pueden desencadenar cambios de alcance en el sistema político español, porque están poniendo de

relieve aceleradamente la quiebra del Régimen de la transición. Y segundo, porque no se puede descartar que este ascenso de la sociedad civil a la voz propia, y por tanto a la categoría de sujeto político de pleno derecho, pueda consolidarse. Hasta el momento, en este punto, la ANC es mucho más tradicional que el PC, y dice hacer su papel de vigilante del proceso pero evitando sustituir a los partidos. Por su parte, el PC, mucho menos numeroso (46.000 adheridos con DNI sobre la mesa) sostiene que dotarse de un Estado serviría de poco si la ciudadanía no cambia también de sociedad y, para conseguirlo, busca no tanto la independencia, aunque hablan de “república catalana”, como ofrecer de una vez una alternativa a la misérrima sociedad neoliberal que asfixia a la mayoría de la población y ensamblar, en cambio, una comunidad gobernada por los principios de la democracia participativa. Frente a la crisis, mercados y clase política al servicio de la ciudadanía, reemplazo del Régimen de la transición, profundización de la democracia, control popular. Significativamente, el 11 de septiembre de 2013, activistas de PC cercaron con sus manos unidas la sede central de La Caixa en Barcelona sin perder contacto físico con la cadena humana general organizada por la ANC.

Lo dicho sugiere que tanto o más rupturista que la independencia que plantean estas asociaciones de amplísima base social es la posibilidad de dar una respuesta al bloqueo de la democracia por parte del sistema de partidos que, con ligerísimas excepciones, han mostrado durante la crisis su sumisión completa, no a los electores, sino a los dictados de la élite neoliberal. Es como si esa sociedad civil catalana que está rozando la mayoría de edad manifestara que, si los programas electorales no sirven para nada importante, es hora ya de movilizar desde abajo unos comités electorales ciudadanos que se presenten a las elecciones con el único fin de ceñirse a los intereses de la mayoría.

Estamos ante un proceso lleno de fragilidades y peligros pero, para los que buscan alumbrar una comunidad humana digna de este nombre, también esperanzador: estamos presenciando una forma innovadora de respuesta desde abajo ante la crisis y la desvergüenza de las élites que, impertérritas, siguen a lo suyo. ¿Tiene alguna posibilidad una “democracia de la sociedad civil” como la que apunta (y de la que hablan Gideon Baker y otros) en la

Europa de hoy? Quizá valga la pena comprobarlo. Pero en todo caso, lo verdaderamente nuevo del episodio actual de conflicto sería que esta emancipación de la sociedad civil continuara desplegándose y, sin caer en el populismo ni la violencia, tomara el mando en sustitución de la vieja política y la inoperancia de los partidos tradicionales.

Noviembre de 2013

Artículo enviado a *El País* y no publicado.